

**JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
PARTIDARIOS DEL MILITANTE**

EXPEDIENTE: CEJP-MI-JDP-001/2013.

**PROMOVENTE: ISRAFIL ANTONIO FILÓS REAL,
MILITANTE DEL MUNICIPIO DE
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.**

**RESPONSABLE: MARÍA LORENA MARÍN MORENO,
SECRETARIA GENERAL DEL C.D.E. DEL
P.R.I. EN EL ESTADO DE MÉXICO.**

Toluca de Lerdo, Estado de México, a nueve de abril de dos mil trece.

VISTO el escrito de cuenta, presentado ante esta Comisión Estatal de Justicia Partidaria, el día cinco de abril del año en curso, por el **C. ISRAFIL ANTONIO FILÓS REAL**, Militante del Partido Revolucionario Institucional en el Municipio de Toluca, Estado de México, por el que formula denuncia de hechos y actos realizados por la **C. MARÍA LORENA MARÍN MORENO**, en su carácter de Secretaria General del Comité Directivo Estatal del P.R.I. en el Estado de México, solicitando en el escrito de referencia la intervención de esta Comisión con el objeto de revertir y/o resarcir los actos y consideraciones mencionadas en el mismo, así como la integración en la estructura del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México de la Coordinación Estatal de Atención a Grupos Vulnerables y la emisión de la Convocatoria correspondiente a la elección y nombramiento de la dirigencia de la mencionada Coordinación; y - - - - -

R E S U L T A N D O

A. Que con fecha cinco de abril del año dos mil trece, el C. ISRAFIL ANTONIO FILOS REAL, presentó ante esta Comisión Estatal de Justicia Partidaria escrito por el que denuncia hechos y actos supuestamente realizados por la C. MARÍA LORENA MARÍN MORENO, en su carácter de Secretaria General del Comité Directivo Estatal del P.R.I. en el Estado de México; - - - - -

B. Que en la misma fecha, cinco de abril de dos mil trece, la Secretaría General de Acuerdos de esta Comisión Estatal de Justicia Partidaria, dio cuenta del escrito de impugnación a la Presidencia de dicha Comisión, dictándose en fecha ocho de abril del presente año, el acuerdo por el que se ordenó el turno del expediente relativo a la presente inconformidad a la Secretaría General de Acuerdos de ésta instancia impugnativa para su sustanciación y formulación del proyecto de sentencia, en términos de los artículos 44 y 49 fracción I del Reglamento de Medios de Impugnación; - - - - -

C. Que una vez agotada la revisión oficiosa que exige los ordenamientos reguladores del presente asunto es menester emitir resolución, misma que se pronuncia al tenor de los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

I.- Que la Comisión Estatal de Justicia Partidaria es el órgano del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México, encargado de llevar a cabo la justicia partidaria, garantizando los principios de unidad, legalidad, certeza, imparcialidad, equidad y transparencia así como el orden jurídico en los procesos internos para elegir dirigentes y postular candidatos, debiendo fundar y motivar sus resoluciones con base en lo previsto en los Estatutos, los reglamentos e instrumentos normativos partidistas, y aplicando supletoriamente las leyes de la materia respectiva, de conformidad a lo dispuesto en los Artículos 2 y 68 del Reglamento Interior de las Comisiones Nacional, Estatales y del Distrito Federal de Justicia Partidaria, así como los artículos 1, 2, 8 y 12 del Reglamento de Medios de Impugnación. - - - - -

II.- Que los actos señalados por el promovente en el escrito de inconformidad que se provee, se tratan de actos emitidos por órganos o dirigentes del Partido con jurisdicción en el Estado de México, de conformidad con los Artículos 209, 210, 211, 214 fracciones I, V y X y 215 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional; 1, 2, 24, 33, 34, 35, 36 y 43 del Reglamento de las Comisiones Nacional, Estatales y del Distrito Federal, Sanciones; 1, 2, 3, 5 fracción IV y 8 del Reglamento de Medios de Impugnación, por lo que esta Comisión Estatal es competente para conocer de la presente controversia. - - - - -

III.- Que antes de entrar al estudio de fondo, por economía procesal y toda vez que es esencial para emitir una resolución, resulta conveniente iniciar por revisar si se cumplen los requisitos de procedibilidad señalados en los ordenamientos aplicables, y si éstos se encuentran debidamente satisfechos, por lo que en el presente caso, una vez realizada la revisión oficiosa se encontró que, de conformidad con lo establecido en los artículos 16 párrafo segundo, 18 fracciones I, II, IV y IX, 21 fracción V, 22, 23 fracciones I, II, III y IV, 43 y 49 fracción IV del Reglamento de Medios de Impugnación, **EL IMPUGNANTE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESENCIALES DE PROCEDIBILIDAD** establecidos en los numerales invocados, necesarios para la admisión y sustanciación de la presente Inconformidad, ya que presenta su escrito fuera de los plazos establecidos en el párrafo segundo del Artículo 16 del Reglamento de Medios de Impugnación, que a la letra dice: - - - - -

Reglamento de Medios de Impugnación

“Artículo 16.

...

El Juicio para la Protección de los Derechos Partidarios del Militante deberá interponerse dentro de los cuatro días hábiles contados a partir del día siguiente del que se hubiese notificado, publicado o conocido el acto o resolución impugnado”.

Por lo que, como hace mención el promovente en su escrito inicial, tuvo conocimiento del acto que impugna el día **siete de marzo del dos mil trece**, presentando su escrito ante esta Instancia de Justicia Partidaria el día **cinco de abril del presente año**, por lo que de conformidad con la fracción IV del artículo 49 del mismo ordenamiento reglamentario, procede emitirse **ACUERDO DE DESECHAMIENTO**, toda vez que la presente inconformidad resulta notoriamente

improcedente, y en consecuencia deberá decretarse su desechamiento sin entrar al estudio del fondo de la misma. - - - - -

IV.- Efectivamente, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 23 fracción III del Reglamento de Medios de impugnación, los requisitos de procedibilidad son los siguientes: - - - -

*“**Artículo 18.-** Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnado, y deberán cumplir con los requisitos siguientes:*

- I. Presentarse dentro de los plazos establecidos para la interposición de los medios de impugnación;*
- II. Dirigirse al Presidente de la Comisión competente;*
- III. Estar escritos en idioma español;*
- IV. Hacer constar el nombre del actor y describir la personería o carácter con la que se comparece y acreditarla con los documentos respectivos;*
- V. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la ubicación territorial de la Comisión correspondiente y, en su caso, autorizar a quien en su nombre las pueda oír y recibir; apercibido que de no hacerlo, todas, incluidas las personales, se realizarán válidamente por estrados;*
- VI. Identificar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable del mismo;*
- VII. Hacer la descripción cronológica de los hechos que se presuman sean causa de agravio;*
- VIII. Mencionar los artículos que se estimen violados en su perjuicio;*
- IX. Señalar las pruebas que ofrezca y/o acompañe al escrito que estén relacionadas con los hechos que reclama; y solicitar las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano partidario correspondiente y no le hubieren sido entregadas. Cuando la violación reclamada verse exclusivamente sobre puntos de derecho no será necesario cumplir con este requisito;*
- X. Contener los puntos petitorios que describan lo que se solicita de la Comisión ante la que se comparece; y*
- XI. Hacer constar la firma autógrafa de quienes en ellos intervengan o, en su caso, contener su huella digital impresa.*

El incumplimiento de los requisitos previstos en las fracciones I, VI y XI, dará lugar al desechamiento de la instancia”.

*“**Artículo 23.-** Los medios de impugnación previstos en este ordenamiento serán improcedentes en los siguientes casos:*

- I. Se pretenda impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico del actor;*
- II. Se presenten fuera de los plazos señalados en este Reglamento;*

- III. Cuando el promovente carezca de legitimación en los términos del presente ordenamiento;
- IV. El acto o resolución se hayan consumado de un modo irreparable, o que se hubiesen consentido tácita o expresamente;
- V. No se hayan agotado las instancias previas en su caso;
- VI. Cuando en un mismo escrito se pretenda impugnar más de una elección; y
- VII. Cuando los agravios manifiestamente no tengan relación directa con el acto o resolución que se pretende combatir, o bien porque de los hechos que se expongan no pueda deducirse agravio alguno”.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial XVI/2001 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: - -

CADUCIDAD. SUS PRINCIPIOS RIGEN PARA LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORALES.-

Los principios doctrinales sobre la caducidad resultan aplicables al derecho conferido para pedir la revocación, modificación o nulificación de los actos de las autoridades electorales, a través de los medios de impugnación que prevén las leyes de la materia, en razón de que ese derecho está regulado de tal manera que se satisfacen totalmente los elementos constitutivos de la figura jurídica en cuestión, por lo siguiente: a) El derecho de impugnación constituye una facultad, potestad o poder para combatir actos o resoluciones de las autoridades electorales, mediante la promoción o interposición de los juicios o recursos fijados por las leyes correspondientes, con el claro objeto de crear, modificar o extinguir las relaciones o situaciones jurídicas que se consignan o derivan de tales actos o resoluciones, que se encuentran referidas a cuestiones de orden público; b) El contenido de los actos y resoluciones electorales se rige por el principio de certeza, por exigencia directa del artículo 41, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 73 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que sólo se puede respetar cabal y adecuadamente si los citados actos y resoluciones gozan de definitividad y firmeza, y esto se consigue con la interposición y resolución de los procesos impugnativos o con el transcurso del tiempo establecido para hacer tal impugnación; c) Dicha certeza debe ser pronta, especialmente en los procesos electorales, porque las etapas de éstos no tienen retorno, en determinados momentos y circunstancias no cabe la reposición de ciertos actos y resoluciones, y la validez y seguridad de cada acto o resolución de la cadena que conforma estos procesos, puede dar pauta para elegir entre varias posibles acciones o actitudes que puedan asumir los protagonistas, sean las propias autoridades, los partidos políticos o los ciudadanos, en las actuaciones y fases posteriores, dado que éstas deben encontrar respaldo en las precedentes y estar en armonía con ellas; d) Los plazos previstos por la ley para el ejercicio del derecho en comento son breves, pues para la generalidad de los medios de impugnación, según se advierte en materia federal en el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es de cuatro días hábiles, fuera de los procesos electorales y naturales durante éstos, e inclusive se llegan a prever plazos

menores, como el señalado para interponer el recurso de apelación en el artículo 43, apartado 1, inciso a), del mismo ordenamiento; e) Está regulada expresamente la extinción del derecho mencionado, si no se ejerce dentro del limitado plazo fijado por la ley, al incluir en el artículo 10, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dentro de los medios de impugnación que serán improcedentes, a aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en esa ley; f) Este medio de extinción del derecho opera por el mero transcurso del tiempo, dado que no se exige en la ley ningún otro requisito; g) El mismo no es susceptible de suspensión o interrupción, en virtud de que el ordenamiento legal que lo regula no contempla que, ante determinados hechos, actos o situaciones, el plazo legal quede paralizado para reanudarse con posterioridad, o que comience de nueva cuenta, ni se encuentran bases, elementos o principios que puedan llevar a dicha consecuencia en condiciones ordinarias; h) Esta forma de extinción no admite renuncia, anterior o posterior, porque está normada por disposiciones de orden público que no son renunciables, por su naturaleza, y no existen en la normatividad aplicable preceptos que establezcan alguna excepción para esta hipótesis; i) Como está incluida dentro de las causas de improcedencia, se debe invocar de oficio por los tribunales, independientemente de que se haga valer o no por los interesados.

Tercera Época

Recurso de apelación. [SUP-RAP-043/2001](#). Familia en Movimiento, Agrupación Política Nacional. 25 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime del Río Salcedo.

Notas: El contenido del artículo 41, párrafo segundo, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en esta tesis, corresponde con el 41, párrafo segundo, base V, de la Constitución vigente; asimismo, el artículo 73 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde con el 109, del ordenamiento vigente a la fecha de publicación de la presente Compilación.

La Sala Superior en sesión celebrada el catorce de noviembre de dos mil uno, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 38 y 39.

En el presente asunto, como ha quedado señalado, se incumplió con los requisitos de procedibilidad referidos en el presente considerando, por lo que se actualiza objetivamente la hipótesis jurídica establecida en la fracción IV del Artículo 49 del Reglamento de Medios de Impugnación antes mencionado, que a la letra dice: - - - - -

“Artículo 49.- Recibida la documentación a que se refiere el artículo 44 de este Reglamento, se estará a lo siguiente:

I.

...

*IV. Si de la revisión de oficio de la procedibilidad del medio de impugnación se advierte que se incumple alguno de los requisitos esenciales para sustanciar y resolver el asunto, que **resulta evidentemente frívolo o bien encuadra en una de las causales de improcedencia o sobreseimiento, el Presidente de la Comisión competente, asistido por el Secretario General de Acuerdos, emitirá el acuerdo correspondiente para su desechamiento;***

...

V. ...”

Por lo que en términos de la fracción IV del artículo 49 del ordenamiento reglamentario antes invocado, procede el Desechamiento de plano, sin entrar al estudio de fondo en el presente asunto. -----

V.- En cuanto al requisito de acreditar la personería exigido por la fracción IV del artículo 18 del Reglamento de Medios de Impugnación citado, se encuentra que es requisito indispensable de procedibilidad la acreditación de la personería con la que comparece el actor, esto es, que sea **promovido por militante del Partido Revolucionario Institucional**, considerando lo señalado en el artículo 22 del Reglamento de Medios de Impugnación, que establece que “*La personería se acredita mediante la exhibición del documento en original o copia certificada en el que conste tal carácter, el que deberá acompañarse a la promoción respectiva*”. En consecuencia, el ciudadano que promueva un medio intra-partidista de defensa al considerar violados sus derechos como militante del Partido Revolucionario Institucional, deberá acreditar fehacientemente tal carácter mediante la documental o el instrumento idóneo, esto es, la exhibición del instrumento en original o copia fotostática certificada en el que conste el carácter de militante priísta con el que promueve, y en el caso concreto que nos ocupa el promovente **NO PRESENTÓ DOCUMENTAL ALGUNA CON LA QUE ACREDITARA LA CALIDAD DE MILITANTE**, por lo que no se puede deducir de manera alguna su eventual militancia que lo legitime para acudir a esta instancia impugnativa, siendo que resulta evidente que si el promovente no acredita la calidad de militante que le permita impugnar los acuerdos que emita la Dirigencia del Comité Directivo Estatal, carece de interés legal para promover el presente medio de impugnación y consecuentemente actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia, por lo que, en términos de la anteriormente señalada fracción IV del artículo 49 del ordenamiento reglamentario antes invocado, procede el Desechamiento de plano, sin entrar al estudio de fondo en el presente asunto. -----

VI.- Adicionalmente de la falta de la acreditación de la personería, en el presente caso se actualiza objetivamente el Desechamiento de Plano, sin entrar al estudio de fondo de los argumentos que se contienen en el escrito inicial, por ser evidente que **DE LOS HECHOS QUE SE CONSIGNAN EN EL ESCRITO QUE SE PROVEE NO PUEDE DEDUCIRSE AGRAVIO ALGUNO**, lo que resulta claro de la simple lectura del escrito de cuenta, mismo que sólo se concreta a exponer hechos hipotéticos y comentarios de desprestigio sin presentar pruebas documentales que

acrediten su dicho, ni formula un razonamiento lógico jurídico que lo sustente, además de no vincular de manera alguna la supuesta ilegalidad con sus derechos partidarios, por lo que no acredita interés jurídico ni afectación a sus derechos partidarios, siendo procedente el desechamiento mencionado.-----

VII.- Asimismo, respecto al Considerando anterior, es imperativo señalar que toda vez que al no hacer una descripción cronológica adecuada de los hechos que permitan a esa instancia presumir se cause en su agravio el acto de autoridad partidaria que constituya una evidente violación de los ordenamientos normativos del Partido, que pudieran tener relación directa con el acto que se pretende combatir, actualiza la especie la improcedencia prevista por la fracción VII del artículo 23 del ordenamiento reglamentario en cita, el cual señala: -----

“Artículo 23.- Los medios de impugnación previstos en este ordenamiento serán improcedentes en los siguientes casos:

- I. Se pretenda impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico del actor;*
- II. Se presenten fuera de los plazos señalados en este Reglamento;*
- III. Cuando el promovente carezca de legitimación en los términos del presente ordenamiento;*
- IV. El acto o resolución se hayan consumado de un modo irreparable, o que se hubiesen consentido tácita o expresamente;*
- V. No se hayan agotado las instancias previas en su caso;*
- VI. Cuando en un mismo escrito se pretenda impugnar más de una elección;*
y
- VII. **Cuando los agravios manifiestamente no tengan relación directa con el acto o resolución que se pretende combatir, o bien porque de los hechos que se expongan no pueda deducirse agravio alguno**”.*

Lo que se desprende objetivamente del hecho de que el recurrente manifiesta inconformidad en contra de la supresión de la Coordinación Estatal de Atención a Grupos Vulnerables del C.D.E. del P.R.I. en el Estado de México, instruida por la dirigencia de este Instituto Político y no obstante, en su relación de hechos no establece de forma alguna actos o situaciones que se relacionen con una afectación a sus derechos partidarios, siendo notoriamente oscuro e irregular en la relatoría de su propio escrito, pudiendo encuadrar en una cuestión de frivolidad, ya que de la lectura del mismo se desprende claramente que el ahora recurrente únicamente manifiesta situaciones generales del partido **sin referirse específicamente a los supuestos hechos irregulares que se identifiquen con los actos que manifiesta impugnar, además de que la promoción de mérito es omisa en señalar los artículos que estima violados en su perjuicio, así como en señalar las pruebas o elementos que pudieran generar convicción a este Órgano Jurisdiccional.** -----

A lo anterior, cabe hacer mención que esta autoridad partidaria, al realizar la primera lectura del escrito que se provee, al no administrarse los hechos de manera congruente y clara y al no encontrarse acreditada afectación al interés jurídico, ni afectación a los derechos partidarios del

militante, es menester señalar que el escrito presentado por el promovente encuadra en el supuesto de frivolidad. - - - - -

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 33/2002 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: - - - - -

FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE.-

En los casos que requieren del estudio detenido del fondo para advertir su frivolidad, o cuando ésta sea parcial respecto del mérito, el promovente puede ser sancionado, en términos del artículo 189, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se pueda advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de la cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso es cuando, no obstante que el impugnante tuvo a su alcance los elementos de convicción necesarios para poder corroborar si efectivamente existieron irregularidades en un acto determinado, se limita a afirmar su existencia, y al momento de que el órgano jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del material probatorio clara e indudablemente se corrobora lo contrario, mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren de interpretación alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo, lo que sucede en los casos en que el actor se limita a afirmar que en la totalidad de las casillas instaladas en un municipio o distrito, la votación fue recibida por personas no autorizadas, y del estudio se advierte que en la generalidad de las casillas impugnadas no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia, como garantía individual de todo gobernado y protegida tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en las leyes secundarias, no puede presentar abusos por parte del propio gobernado, pues se rompería el sistema de derecho que impera en un estado democrático. La garantía de acceso efectivo a la justicia es correlativa a la existencia de órganos jurisdiccionales o administrativos que imparten justicia, por lo que a esas instancias sólo deben llegar los litigios en los que realmente se requiera la presencia del juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar la realidad puede llevarse a los tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el juzgador los supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten del amparo de la justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o modos erróneos de apreciar las

cosas, pero al verificar los elementos objetivos que se tienen al alcance se advierte la realidad de las cosas, evidentemente tales hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, entorpecer el correcto actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos electorales deben resolver con celeridad y antes de ciertas fechas. En tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de derecho y resulta grave para los intereses de otros institutos políticos y la ciudadanía, por la incertidumbre que genera la promoción del medio de impugnación, así como de aquellos que sí acuden con seriedad a esta instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a quienes intervienen en ellos, y pueden distraer la atención respectiva de los asuntos que realmente son de trascendencia para los intereses del país o de una entidad federativa, e inclusive el propio tribunal se ve afectado con el uso y desgaste de elementos humanos y materiales en cuestiones que son evidentemente frívolas. Tales conductas deben reprimirse, por lo que el promovente de este tipo de escritos, puede ser sancionado, en términos de la disposición legal citada, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso.

Tercera Época

Juicio de revisión constitucional electoral. [SUP-JRC-033/2002](#). Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. [SUP-JRC-050/2002](#). Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. [SUP-JRC-051/2002](#). Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. Unanimidad de votos.

La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 34 a 36.

Independientemente de ello, es menester señalar que de presentarse el supuesto de que se haya suprimido la Coordinación Estatal de Atención a Grupos Vulnerables del C.D.E. del P.R.I. en el Estado de México, es facultad exclusiva de la Dirigencia del Comité Directivo Estatal del PRI el crear y, por ende, eliminar las Coordinaciones que estime necesario, puesto que en el presente caso nuestro Estatuto rector vigente establece en su Título TERCERO lo relativo a la Organización y Dirigencia del Partido, señalando en la Sección “3” del Capítulo III, artículos 120 al 124 la normatividad relativa a los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal, y particularmente en el artículo 122 fracción XIII de los Estatutos del Partido en cuanto a las atribuciones del Comité Directivo Estatal para la creación de las Coordinaciones que considere necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones, las cuales serán sometidas a la

autorización del Consejo Político Estatal, situación en la que el promovente no cuenta con las facultades estatutarias para su intervención. -----

En mérito de lo expuesto, esta Comisión Estatal de Justicia Partidaria, con fundamento en los Artículos 209, 210, 211, 214 fracciones I, III, X y XII, y 215 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional; 1, 2, 3 fracción III, 4 fracción II, 28 y 31 fracciones IV y VIII del Reglamento Interior de las Comisiones Nacional, Estatales y del Distrito Federal de Justicia Partidaria; 1, 2, 3, 5, 6, 8 al 22, 23 fracción III, 34, 35, 43 al 49 del Reglamento de Medios de Impugnación, dicta los siguientes: -----

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se decreta la improcedencia y en consecuencia se **DESECHA DE PLANO** el medio de impugnación que pretende hacer valer el C. SRAFIL ANTONIO FILÓS REAL, por actualizarse objetivamente la hipótesis jurídica prevista por la fracción IV del artículo 49 del Reglamento de Medios de Impugnación, al presentar su escrito fuera de los plazos previstos para tales efectos y demás razones y fundamentos legales que se precisan en los considerandos de esta resolución.

SEGUNDO.- Notifíquese al promovente personalmente en el domicilio que señala para tales efectos y publíquese la presente resolución en los estrados de esta Comisión para su debida publicidad y efectos correspondientes. -----

Así lo resolvió la Comisión Estatal de Justicia Partidaria, y por mandato de lo dispuesto por el artículo 16 fracción IV del Reglamento Interior de las Comisiones Nacional, Estatales y del Distrito Federal de Justicia Partidaria, se autoriza al Presidente LICENCIADO JORGE TORRES RODRÍGUEZ a su firma para la debida publicación y notificación de la presente, asistido por el Secretario General de Acuerdos LICENCIADO LUIS REYNA GUTIERREZ. -----

“DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL”

POR LA COMISIÓN

PRESIDENTE

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

JORGE TORRES RODRÍGUEZ

LUÍS REYNA GUTIÉRREZ